

AJAY GUDAVARTHY*
G.VIJAY**

ANTINOMIAS DE LA SOCIEDAD POLÍTICA. IMPLICANCIAS DEL DESARROLLO INCIVIL

LA INTERRELACIÓN ENTRE EL ESTADO, la sociedad civil y, más recientemente, la sociedad política, pese a las diferencias en torno de lo que constituye cada uno de esos dominios, ha emergido singularmente como el área más significativa de estudio para la comprensión del proceso de democratización. La sociedad civil ha sido durante largo tiempo, luego de la debacle de Europa del Este, proyectada y sostenida como una panacea integral para la mayor parte de los problemas que afectan a las sociedades en desarrollo. Se trata de un imaginario político esculpido para representar una serie de valores activamente perseguidos por una variedad de instituciones. La sociedad civil se ha convertido en una suerte de un “atajo aspiracional” para las ideas/valores de la equidad, la profundización de la participación, la equidad pública, los derechos individuales, la tolerancia, la confianza, la legalidad, la cooperación y la ciudadanía informada (Elliot, 2003). Estos ideales son impulsados y protegidos por la actividad asociativa voluntaria independiente o “por fuera” del Estado. Dicha actividad puede incluir un amplio rango de asociaciones o instituciones tales como clubes, organismos religiosos, *sabhas* (concejos o asambleas)

* gajay99@rediffmail.com

** gudavarthyvijay@rediffmail.com

y *samajs* (sociedades), sindicatos, asociaciones profesionales, grupos de acción comunitaria, ONG, medios de comunicación, institutos de investigación y organizaciones de jóvenes, para mencionar unas pocas (ibíd.). La sociedad civil fue, por consiguiente, vista como una alternativa radical en sociedades reguladas por el Estado.

Sin embargo, tras la extinción de la euforia inicial, los académicos comenzaron a manifestar serias dudas acerca del alcance y la naturaleza de la autonomía de la sociedad civil y sus implicancias para el proceso de democratización. Por ejemplo, el énfasis en la confianza (una de las señales más significativas de la sociedad civil) en situaciones de marcada desigualdad no solamente ofrece una falsa promesa a los pobres sino que además los priva de su derecho a la lucha y la protesta (Edwards, 2002). Allí donde las asociaciones son jerárquicas y se basan en lazos adscriptivos, la opción por un concepto asociativo de la democracia simplemente deja intactas y reforzadas las inicuas estructuras sociales (Mahajan, 1999). En una sociedad con acceso desigual a la ley, el énfasis en la legalidad –en tanto que criterio definitorio de la sociedad civil– tan sólo habilita al gobierno para desocupar a la fuerza los asentamientos precarios en nombre del desarrollo (Elliot, 2003; Me-non, 2004). Esas graves y tal vez evidentes limitaciones del terreno de la sociedad civil son groseramente ignoradas en las versiones eufóricas, pues ellas lo abstraen de toda referencia concreta a las sociedades civiles existentes o a la forma en que ellas se transforman bajo la influencia de otros campos. La sociedad civil continúa siendo pensada como no relacionada con el Estado ni marcada por conflictivas relaciones de poder (Chandoke, 2003). ¿Cómo movernos más allá de esas nociones deshistorizadas, despolitizadas y achatadas de la sociedad civil, para reubicarla en cambio en el marco del proceso de democratización?

Se han sugerido tres grandes alternativas. La primera alternativa, en lugar de desacoplarse, la sociedad civil debe trabajar o, más bien, adquiere sentido sólo como complemento del Estado. “Sólo el Estado puede crear ciertas condiciones necesarias para proteger las instituciones de la sociedad civil” (Mahajan, 1999). En otras palabras, las sociedades civiles están constituidas por una comunidad de ciudadanos y, por consiguiente, es necesario seguir reconociendo al Estado como la “agencia movilizadora” específica, en vez de librarlo de toda responsabilidad. Por lo tanto, “si lo que la sociedad civil busca es salvarse y, de ese modo, salvar la libertad concedida a la ciudadanía, su proyecto sólo puede realizarse por medio del Estado democrático constitucional” (Gupta, 1999).

La segunda alternativa, de corte tocquevilliano, enfatiza la autonomía de las instituciones intermedias contra el Estado demagógico, por un lado, y contra las fuerzas políticas sectarias y comunitarias,

por el otro. En este modelo se supone la existencia de un marco legal-racional independiente sujeto a reglas y basado en normas que eventualmente democratizarían a la sociedad (Beteille, 1995).

La tercera alternativa subraya la significación de las iniciativas de base (Kothari, 1988), que se han desarrollado y recientemente han sido conceptualizadas como el sitio alternativo de la “sociedad política”, que constituye, junto con partidos políticos y movimientos sociales organizados, formaciones políticas no partidarias para las mediaciones “estratégicas” y “contextuales” por parte de los sectores subalternos (Chatterjee, 1997). Según Partha Chatterjee, “por sociedad política quiero significar un terreno de instituciones y actividades donde tienen lugar numerosas mediaciones” (Ibíd.). Así, “la política de la democratización debe por lo tanto ser realizada no en las clásicas transacciones entre Estado y sociedad civil sino en el terreno mucho menos bien definido, legalmente ambiguo y contextual y estratégicamente demarcado de la sociedad política” (Chatterjee, 1998). La idea de “sociedad política” es potencialmente radical en el sentido de entender que las “poblaciones” que constituyen este sitio alternativo no son agentes ni del Estado ni de la sociedad civil. A menudo se encuentran excluidas del proceso de participación política. “En aras de la supervivencia y el sustento, tienen que negociar tanto con el Estado como con la sociedad civil o esfera pública, terrenos a menudo liderados y ocupados por los sujetos burgueses de clase media y las élites sociales” (Chen, 2003). Pone de relieve el hecho de que no solamente el Estado sino también la sociedad civil podría potencialmente volverse parte del bloque de poder haciendo uso de las reconocidas normas “civiles” y atacar sin piedad a las clases subalternas para preservar sus propios intereses dominantes. Por consiguiente, los modos de protesta de la “sociedad política” no son consistentes con el principio de las asociaciones en la sociedad civil; violan las normas institucionales de la sociedad civil liberal.

Por supuesto que el problema con la ‘sociedad política’ entendida en este sentido es que aquí las actividades no necesariamente serán acordes a nuestra comprensión de lo que es ‘progresista’ o ‘emancipatorio’. Podría tratarse de las luchas de los ocupantes ilegales de tierras gubernamentales para obtener derechos de residencia (lo cual incluiría, por ejemplo, la conexión ilegal a las líneas eléctricas), pero podría del mismo modo tratarse del intento de una secta religiosa de preservar el cadáver de su líder en la creencia en su resurrección, o de la decisión del Panchayat [Concejo] de una aldea de matar a una mujer acusada de adulterio. (Menon, 2004)

Por consiguiente, estas luchas con frecuencia no pasan “la prueba de la legalidad y la constitucionalidad establecida por la sociedad civil” (Ibíd.).

La idea de “sociedad política”, aunque constitutivamente “exterior” y “opuesta” a la de sociedad civil, no demarca claramente las formas de protesta que en verdad la constituyen. Lo que es más importante, de hecho funde un amplio rango de acciones “estratégicas” adoptadas por los sectores subalternos como parte de este “mucho menos bien definido” terreno de actividad política. Es, por lo tanto, también menos ideológico en la diferenciación entre movimientos políticos organizados en torno de “principios” democráticos y radicales alternativos (tanto al Estado como a la sociedad civil) y la “política de lo posible”, “estratégica” y “contextualmente” definida. De hecho, los funde conjuntamente para constituir un terreno ininterrumpido de “estrategias” de negociación y supervivencia. El punto es que para todo proyecto de ideas de transformación democrática radical, las creencias y prácticas en este terreno no se sostienen unas independientemente de otras. En verdad, si no estamos preparados para establecer una distinción más matizada entre las “estrategias” nacidas de los imperativos de la supervivencia y las que impulsan a los colectivos a forjar una protesta informada, más allá de lo inmediatamente basado en intereses, el proyecto de democratización entraría en una peligrosa lógica autodestructiva. Habríamos completado el círculo al establecer nociones igualmente despolitizadas, deshistorizadas y achatadas de sitios políticos radicales alternativos, equivalentes a las que iniciaron nuestra crítica de la sociedad civil. Por consiguiente, la demarcación de los “principios rectores de la sociedad política” y de las “formas de institucionalización” alternativas que ella supondría se tornaría necesariamente ambigua. Mientras que sin duda es necesario reconocer que el desarrollo incivil está haciendo cada vez más difícil para los sectores subalternos sostener protestas organizadas y los está empujando hacia estrategias de supervivencia más espontáneas, ¿no resulta acaso, por esa misma razón, imperativa la búsqueda de señales, de modos alternativos de protesta que podrían realmente sacarlos de lo que parece ser una lucha interminable por la supervivencia? En el intento de contrastarla constitutivamente con la sociedad civil, la “sociedad política” acaba siendo un terreno ininterrumpido de acciones políticas cualitativamente distintas –movimientos sociales radicales, partidos políticos y formaciones políticas no partidarias para negociaciones estratégicas y contextuales– que en la práctica no pueden realmente coexistir y que están destinadas a entrar en conflicto y a dislocarse recíprocamente.

Este trabajo es un intento de profundizar en las consecuencias de las antinomias de las nociones achatadas de la política subalterna sobre la base de un trabajo de campo en un poblado afectado por la contaminación –Kazipally– y de mostrar de qué modo las demandas

sostenidas de cierre de las industrias contaminantes sobre la base de la movilización y la acción colectivas son enfrentadas con la represión estatal incivil en conexión con la mafia y las élites económicas (los industrialistas) en el mercado. Ello a su vez empuja a los colectivos a la ruptura y los reemplaza por demandas basadas en intereses ya sea al nivel de grupos más pequeños (formados en torno de las estratificaciones sociales disponibles), ya sea incluso a nivel individual. Ello torna cada vez más difícil el sostenimiento de una acción política colectiva a lo largo del tiempo y el logro de cambios estructurales de largo plazo (en este caso, el cierre de las industrias y la reactivación de la agricultura). *Por consiguiente, el supuesto de que una “sociedad política” puede sin problemas referirse a o subsumir tanto movimientos políticos organizados como “política estratégica” contextualmente demarcada se vuelve de hecho insostenible.* En otras palabras, aunque es democrático reconocer las estrategias de supervivencia, son sin embargo las luchas que se colocan más allá de las estrategias de supervivencia las que resultan inseparables de toda idea significativa de democratización.

EL CONTEXTO

Kazipally es una aldea situada 35 kilómetros al noreste de Hyderabad, en el distrito de Medak. Medak es uno de los distritos más atrasados de la provincia de Andhra Pradesh. La aldea tiene 506 hogares y una población total de 3000 personas. En las páginas que siguen presentamos el marco socioeconómico del pueblo.

Tabla 1.1
Estadísticas ocupacionales

Nº	Categoría	Nº de hogares
1	Pequeños cultivadores	354
2	Cultivadores medianos	50
3	Cultivadores grandes	10
4	Cultivadores ricos	6
5	Peones sin tierra	76
6	Trabajadores industriales	3
7	Otros	7
	Total	506

Fuente: Trabajo de campo.

Table 1.2
Estadísticas de castas

Nº	Casta	Nº de hogares
1	Yadava	40
2	Muthrasi	141
3	Musulmanes	101
4	Mangali	12
5	Chakali	25
6	Goud	10
7	M. Kapu	5
8	Madiga	172
	Total	506

Fuente: Trabajo de campo.

A partir de los datos arriba expuestos resulta evidente que la cantidad de recursos disponibles para las personas que son víctimas de la contaminación industrial son muy limitados. En primer lugar, alrededor del 82% de los hogares dependen de la agricultura. Y un 15% adicional de los hogares están involucrados en labores relacionadas con el trabajo agrícola para su sustento. En conjunto, alrededor del 97% de los hogares depende de la agricultura. Un informe producido por Greenpeace sugiere que la contaminación industrial en esta área ha afectado 2000 acres de tierras arables, además de contaminar el agua de los pozos a un nivel de 140 pies (Greenpeace India, 2004)¹. La contaminación ha apartado a las familias de sus medios de vida tradicionales y ha privado a las personas de sus activos. Estos aldeanos no cuentan con habilidades alternativas para elegir otras vías de empleo. Las industrias, tal como se desprende de la evidencia, no emplean a los aldeanos. Así, aunque las industrias toman subsidios del gobierno con la promesa de que contribuirán al desarrollo de áreas atrasadas, no proporcionan ninguna oportunidad de empleo ni vías de movilidad social a la población local en términos, por ejemplo, del desarrollo de aptitudes laborales. Algunos de los cultivadores marginales y pequeños también están involucrados en otras labores que constituyen su

¹ Ver también "Dirty Nakkavagu Destroying Farmlands, Causing illness", en *Deccan Chronicle*, 19 de agosto de 1996.

principal actividad económica. Existe una disponibilidad de ingresos adicionales para los que se emplean como lavadores, o en ocupaciones tales como la pescadería, la venta de frutas cultivadas en tierras comunales, o actividades dependientes del ganado.

LA NATURALEZA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN Y EL CAPITAL

La industrialización de Kazipally comenzó en el período posterior a la Emergencia, cuando Indira Gandhi se enfrentó en Medak y ganó. Esta área fue adoptada entonces como un Área de Desarrollo Industrial (ADI). Sin embargo, sólo desde 1989 tuvo un rápido crecimiento industrial. La mayor parte de las industrias instaladas después de 1989 operaron sobre la base de licencias y subcontrataciones de multinacionales y grandes corporaciones nacionales.

Actualmente hay alrededor de cincuenta industrias en Kazipally y Gaddapothram. Recientemente se ha descubierto que treinta y cinco de las cincuenta unidades industriales han estado operando sin certificados de habilitación del Consejo Central para el Control de la Contaminación. El Comisionado de Industrias no tiene registros acerca de algunas de estas industrias.

La razón por la cual las corporaciones multinacionales, especialmente las de los Estados Unidos, producen en el exterior es que, según estimaciones de Baumol y Oates (1988), si Estados Unidos tuviera que alcanzar estándares de emisión cero, ello costaría dos billones de dólares a la economía estadounidense. Fue en 1989 cuando la Agencia de Protección Ambiental (APA) entró en funciones en los Estados Unidos. La APA clasificó a los productos, especialmente químicos y metálicos, como toxinas bioacumulantes. Esta es la clase de químicos que no se descomponen y, por consiguiente, aquella cuya emisión acumularía toxinas en el medioambiente. El término "bienes sucios" se asocia también con este tipo de producción. Un "bien sucio" es definido como aquel en que los costos de tratamiento de las emisiones excederían el valor del propio producto final. Es por eso que su producción, si se cumplen los estándares de calidad del agua, el suelo y el aire establecidos por la ley, resulta implícitamente ineconómica. De ahí que las corporaciones multinacionales hayan decidido producir estos "bienes sucios" otorgando licencias de sus productos a productores del tercer mundo. Las corporaciones nacionales, por su parte, están externalizando la producción de "bienes sucios" con el objetivo de asegurarse el ISO 2001 y otras certificaciones de calidad que son una precondition para exportar sus productos a mercados externos. Esta producción subcontratada es realizada también por fábricas del área industrial de Kazipally y Gaddapotharam. De las compañías multinacionales que tienen vínculos con unidades industriales contaminantes, nuestra investigación ha

identificado a Shaw Wallace, que produce la vacuna contra el SIDA para la Fundación Bill Gates, y a los Laboratorios Reddy. Es posible que haya muchos otros grandes actores económicos que, como estos, reivindican producción limpia para el consumo público.

Curiosamente, el Impuesto al Valor Agregado Modificado (IVAM) introducido en 1991 ha constituido un estímulo para las industrias en pequeña escala. Puesto que el IVAM es un impuesto en origen, las industrias en pequeña escala están recibiendo numerosos subsidios a las materias primas, impuestos especiales y otros por el estilo. Además, las compañías en pequeña escala contratan trabajo barato. De ahí el bajo rendimiento del IVAM. Lo cual a su vez supone que las grandes corporaciones conseguirán intermediarios u obtendrán sus productos externalizados a precios menores que si los fabricaran ellas mismas. Puesto que Medak es un área atrasada, los paquetes de incentivos para las industrias son muy atractivos. Y aunque técnicamente la región se ubica en Medak, está a sólo 35 kilómetros de la ciudad, lo cual supone acceso a infraestructura. Este modelo de industrialización, usualmente denominado “nueva industrialización”, ha sido identificado como generador de altos costos sociales tanto en términos de las violaciones flagrantes de estándares laborales como en términos de contaminación ambiental (Vijay, 1999; 2003). Mientras que el mercado para los productos de estas industrias es no-local, la incivildad –es decir, las violaciones de normas establecidas por ley en interés de la comunidad– forma parte de este modelo de industrialización. La necesidad intrínseca de prácticas industriales inciviles propulsa una cadena de incivildad que se manifiesta en el lobby poco ético en círculos políticos, los sobornos a la burocracia, los vínculos con la mafia y otras prácticas inciviles. La incivildad se torna entonces inevitable y sistémica.

EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN Y EL COSTO SOCIAL

Los niveles de contaminación en la cisterna de agua de Kazipally son el resultado de las descargas de desechos industriales tóxicos realizadas a lo largo de los últimos dieciséis años. Numerosos informes, incluidos un informe técnico sobre el agua realizado por el departamento ambiental de la Universidad Tecnológica Jawaharlal Nehru (UTJN) en 1998, las actualizaciones mensuales de la calidad del agua de los depósitos realizadas por la Junta de Control de la Contaminación de Andhra Pradesh (JCCAP), y el más reciente Informe de Datos presentado por el Comité constituido por el Tribunal Supremo de Andhra Pradesh, presidido por el Juez Gopal Rao (2004), han provisto evidencias irrefutables acerca de los niveles alarmantes de daños causados a estos cuerpos de agua. Como parte de nuestra investigación, hicimos analizar muestras de agua en forma independiente por los

Laboratorios Yagna en 1997 y luego, para su comparación, hicimos analizar por el Instituto de Formación e Investigaciones de Protección Ambiental (EPTRI, por sus siglas en inglés) muestras de agua recolectadas en lugares similares en el 2003. Algunos de los hallazgos obtenidos se presentan a continuación.

Table 1.3
Cifras comparativas para 1997-2003 -Resultados de pruebas sobre muestras de agua*

Nº	Parámetro	Rangos normales	Muestra 1		Muestra 2		Muestra 3		Muestra 4	
			1997	2003	1997	2003	1997	2003	1997	2003
1	pH	7-8.5	4,2	7,2	7,8	7,2	7,6	7,2	8,1	7,3
2	Sólidos disueltos	500 mg/l**	3900	2860	7600	2900	970	2865	7960	1860
3	Cloruro	200 mg/l**	340	930	520	855	550	855	250	445
4	Sulfatos	200 mg/l**	260	509	320	488	340	495	140	545
5	Flúor	1.0 mg/l**	1,8	0,752	2,5	0,759	2,3	0,6	1,0	0,666
6	Magnesio	30 mg/l**	300	347	300	346	300	272	180	347
	Calcio	75 mg/l**	700	594	500	644	600	594	200	495

Fuente: Trabajo de campo 1997, Resultados basados en pruebas realizadas por los Laboratorios Yagna, Amberpet. Trabajo de campo 2003, Resultados basados en pruebas realizadas por el Laboratorio EPTRI, Gachibowli.

* Aunque el pueblo de Kazipally está ubicado justo debajo del Kazi Talab, se encuentra a una distancia de alrededor de 250 metros de la actual ubicación del tanque. Esto de algún modo diluye la contaminación para el momento en que el agua llega al pueblo. Recogimos, por lo tanto, diferentes muestras para mostrar también estas variaciones. En el cuadro 1.3 la muestra 1 fue recolectada directamente del tanque. Las muestras 2 y 3 fueron tomadas del canal. Mientras que la muestra 2 fue recogida en un lugar del canal más cercano al tanque, la muestra 3 fue sacada de un punto más cercano al pueblo. La muestra 4 es del agua que hasta tiempos recientes era utilizada para beber. Estos datos primarios pueden ser complementados con otras fuentes de datos secundarios que incluyen los proporcionados por el Comisionado de Industrias, Greenpeace, EPTRI y otros informes.

** Menor o igual a.

A partir de los datos provistos, sabemos que no solamente hay en el agua de Kazipally diversos elementos químicos en concentraciones muy superiores a las normales, sino que además los datos de 2003 para numerosos indicadores muestran un aumento en los niveles de contaminación. La contaminación ha sido ciertamente controlada, pero sólo gracias a la larga batalla librada por la población. No se trata de un mérito de las autoridades regulatorias, puesto que los estándares siguen siendo flagrantemente violados hasta la fecha. Y dicha violación de los estándares es ilegal, ya sea que se trate de una violación por un margen pequeño o por una enormidad, puesto que la existencia de los estándares supone que la presencia de elementos químicos por encima de esos límites puede dañar la vida, la propiedad o la salud

de los habitantes y de otras formas de vida en la naturaleza de las cual depende la comunidad. Este debe ser el marco interpretativo para la lectura de los datos arriba provistos.

Como resultado de la contaminación, casi 7000 acres de tierra en 32 aldeas han sido parcial o completamente destruidos (Informe de la UTJN, 1998). Ha habido numerosos informes acerca de la muerte de peces y ganado de los cuales muchas comunidades rurales dependen para su sustento (Datos de trabajo de campo, 1997-98, 2003-05). El reciente informe sanitario de Greenpeace ha proporcionado sorprendentes revelaciones acerca de las condiciones de la salud en las aldeas afectadas.

Tabla 1.4
Incidencia de enfermedades en las aldeas afectadas

Sistema nervioso	3 veces superior al grupo de control
Sistema circulatorio	2 veces superior al grupo de control
Sistema respiratorio	3,81 veces superior al grupo de control. 1 persona cada 20 está afectada
Sistema digestivo	1,98 veces superior al grupo de control
Sangre y órganos formadores de sangre	2,914 veces superior al grupo de control. 1 persona cada 35 está afectada
Sistemas endócrino, nutricional y metabólico	1,84 veces superior al grupo de control. 1 persona cada 35 está afectada
Neoplasmas	11 veces superior al grupo de control
Piel y tejidos subcutáneos	2,67 veces superior al grupo de control
Malformaciones, deformaciones y anomalías cromosómicas congénitas	3,93 veces superior al grupo de control
Cáncer	11 veces superior al grupo de control

Fuente: Green Peace, 2004

Encontramos, pues, que se han producido enormes daños al medio ambiente natural y que las comunidades locales han debido pagar inmensos costos sociales a causa de la contaminación industrial.

METODOLOGÍA DE ESTE TRABAJO

El presente estudio se centra en la acción colectiva contra la contaminación en un esfuerzo por mostrar de qué manera se torna sostenible en términos prácticos la idea de “sociedad política” entendida

de modo tal de abarcar tanto a la acción o los movimientos colectivos organizados en pos de demandas estructurales como a las variadas “estrategias” o “negociaciones” que persiguen intereses inmediatos relativos a la supervivencia. Con este propósito, este trabajo ha analizado tres grupos sociales organizados e idealmente orientados a la movilización contra las industrias contaminantes. La comunidad agrícola, los jóvenes y las mujeres fueron elegidos como grupos sociales relevantes para este estudio. Ello se debe a que los tres grupos sociales han organizado asociaciones y, con la excepción de la asociación de los agricultores, se trata de asociaciones que en sí mismas están diseñadas para servir a otros propósitos.

Esta investigación intentó averiguar lo que estas asociaciones estaban haciendo frente al problema de la contaminación, que era un problema general de la comunidad aldeana. El Comité Kalushya Vyatireka Raitu (KVRC, *Comité de Agricultores contra la Contaminación*), con una membresía total de cuarenta agricultores, la Asociación de Jóvenes Shivaji, integrada por cincuenta miembros, y los grupos de microcréditos de la agencia gubernamental para el Desarrollo de las Mujeres y los Niños en Áreas Rurales (DWCRA-*Development of Women and Children in Rural Areas*), integrados en conjunto por alrededor de cien mujeres, son las asociaciones que han formado parte de este estudio. La investigación fue realizada en dos fases. Un estudio preliminar realizado en el año 2003 incluye respuestas de los cuarenta agricultores. Una encuesta más reciente realizada en 2005 se basa en una muestra de treinta entrevistados de los tres grupos. Así, este estudio se basa en un total de setenta entrevistas. Para recolectar los datos primarios se utilizaron un cuestionario estructurado y entrevistas informales. Puesto que la experiencia referida es una experiencia compartida, encontramos en la recolección de los datos frecuentes repeticiones en las narrativas; podemos sostener, por consiguiente, que las respuestas contenidas en esta muestra hablan por el conjunto de los grupos sociales representado por las asociaciones.

LA BASE DE LA SOCIEDAD POLÍTICA: ¿COLECTIVOS O INTERESES?

Al investigar acerca del problema de la contaminación, hemos encontrado que toda vez que han producido cuestionamientos estructurales a través de la actividad política colectiva, sus protagonistas se han enfrentado a medios inciviles de represión tanto por parte de los aparatos coercitivos del Estado, como de la policía, como a la coerción procedente de la mafia organizada. Esta incivilidad ha debilitado la actividad política. En las páginas que siguen narramos la experiencia de las víctimas de la contaminación industrial de Kazipally en las si-

tuaciones en que fueron planteadas tales conflictos estructurales.

El conflicto en torno de la contaminación del tanque de la aldea por parte de las industrias tomó una forma política que planteó demandas estructurales. La exigencia del cierre de las industrias contaminantes puede ser vista como una demanda estructural; existen muchas razones por las cuales el cierre de dichas industrias puede ser interpretado como tal. Los pobladores de Kazipally, como ya se ha señalado, dependían básicamente de la agricultura y otras actividades tradicionales vinculadas a ella antes de que el tanque fuera contaminado. El conflicto se articuló, pues, como un conflicto entre los agricultores y la industria. En segundo lugar, como se desprende de la descripción de la naturaleza de la industrialización, estos industriales eran ajenos a la región. Los industriales provienen sobre todo de dos regiones costeras de Andhra Pradesh, Andhra y Rayalaseema. Esta dimensión regional asume una significación especial debido a las crecientes aspiraciones de un estado de Telangana independiente. Además, la dimensión regional es de relevancia en otros dos sentidos. Aunque la política industrial establece el desarrollo de las regiones atrasadas como objetivo de la industrialización rural, bajo la forma de áreas de desarrollo industrial, y justifica el otorgamiento de subsidios y otros beneficios a esas industrias, encontramos que la contribución de dichas industrias al desarrollo de estas regiones atrasadas es muy limitada. La población local no recibe oportunidades de empleo en las industrias. Además, los productos que ellas producen no están destinados al mercado local.

También hemos encontrado que las víctimas de la contaminación incluyen a amplios sectores empobrecidos de la población. Los sin tierra, los propietarios de ganado, los artesanos y los empleados en el sector de servicios tradicional también han sido víctimas, perdiendo fuentes de ingresos, sustento, activos, salud, etc. Frente a las industrias que obtienen enormes ganancias, disfrutan de vínculos con quienes detentan el poder, y cuentan con la capacidad de manipular el sistema, el problema es planteado como un conflicto de los pobres y los vulnerables contra los ricos y los poderosos.

La demanda del cierre definitivo de las industrias contaminantes es, pues, una demanda de la comunidad agrícola contra las industrias irresponsables; es una demanda de la comunidad local frente a los industrialistas en tanto que *outsiders*; y es una demanda de la población pobre y vulnerable contra los *lobbies* en tanto que ricos y poderosos. Es en estos sentidos que la demanda de la clausura permanente de las unidades industriales contaminantes se convierte en una demanda estructural.

Esa demanda fue presentada en numerosas oportunidades. La primera vez que ello ocurrió fue en 1989. Los pobladores de Kazipally y de muchas otras aldeas afectadas, liderados por diferentes organi-

zaciones de la sociedad civil que incluían al Foro contra la Contaminación y a la organización científica Jana Vignana Vedika, entre otras, y por los representantes políticos de las aldeas, llevaron a cabo manifestaciones y *dharnas*². Como consecuencia de ello, la gente de estas aldeas fue golpeada y sus representantes fueron arrestados. Nuevamente en 1994, los aldeanos en lucha contra los industriales fueron atacados por la mafia y aunque los pobladores presentaron alguna resistencia, debieron abandonar sus pueblos temiendo por sus vidas. Los aldeanos que huyeron fueron acusados de cargos que incluyeron el de intento de asesinato. En otra instancia en 1995, los pobladores liderados por algunos de los representantes políticos atacaron a las industrias y agredieron y desvalijaron a los industriales. Como consecuencia de ello, los aldeanos que exigían el cierre de las industrias fueron acusados de intento de asesinato e incriminados por extorsión.

En el 2005, sobre la base de una declaración jurada presentada por la Fundación Goa ante la Corte Suprema que afirmaba que las industrias estaban operando desde 1994 sin los certificados de habilitación del Comité de Control de la Contaminación, la Corte Suprema ordenó la celebración de una audiencia pública. Fueron formuladas muchas objeciones acerca del modo en que dicha audiencia fue llevada a cabo. Los Informes de Evaluación del Impacto de la Contaminación no habían llegado a muchas de las aldeas. Las fechas de la audiencia no estaban claras. Algunos aldeanos se quejaron de haber recibido llamadas amenazantes para disuadirlos de asistir a la audiencia pública.

Pese a todo, el día de la audiencia los pobladores se movilaron en grandes números y proporcionaron testimonio contra la industria. Luego del receso de almuerzo, habiendo percibido que la audiencia pública les estaba resultando desfavorable, representantes de las industrias perturbaron su continuidad mediante una golpiza a un activista de Greenpeace. Ante este ataque se produjeron airadas protestas de los aldeanos, como resultado de las cuales resultó herido el Subinspector Adjunto de Policía. Más tarde, cuando el activista de Greenpeace, junto con un investigador que también estaba movilizandogente, fue a registrar una queja a la estación de policía, ambos fueron nuevamente atacados. Al caer en la cuenta de que los atacados eran activistas que no tenían nada que ver con la protesta de los aldeanos, llegó el Superintendente de Policía y les ofreció una disculpa. Les aseguró que se iniciaría un procedimiento contra el Inspector que los había atacado. Aunque las denuncias contra los representantes de los industriales y el Inspector de Policía fueron registradas, no se iniciaron acciones en ninguno de los casos. Por añadidura, 62 aldeanos, incluidos tan-

2 Su forma más significativa es el bloqueo de la carretera nacional.

to el activista de Greenpeace y el investigador, fueron acusados bajo ocho secciones del Código Penal Indio, entre ellas la sección 307 sobre intento de asesinato. Doce de los 62 nombres fueron mencionados, mientras que los restantes 50 fueron incluidos dentro de la categoría “otros”. Los oficiales de policía recorrieron los poblados chantajeando a sus habitantes con la amenaza de que sus nombres serían incluidos en esta última categoría y quitándoles dinero. El Sarpanch (Presidente del Panchayat) de Kazipally, alineado con los industriales, acudió al pueblo y dijo a los pobladores que se estaban movilizando contra los industriales que si el activista de Greenpeace y el investigador que estaban movilizando gente habían sido golpeados por la policía, ¿qué podían entonces hacer los aldeanos comunes? Desde el punto de vista de los aldeanos, el activista de Greenpeace y el investigador se contaban entre quienes disfrutaban de una red de vínculos con la élite urbana y tenían acceso a la burocracia, e incluso a los ministros del gabinete. Si esas personas podían ser golpeadas estando bajo custodia de la policía, ¿qué protección podrían esperar los pobladores comunes y corrientes? Esto atemorizó a los aldeanos, que se mantuvieron alejados de la audiencia pública durante su segundo día.

El segundo día de la audiencia pública doce microbuses fueron contratadas por las industrias para transportar gente con el fin específico de presentar declaraciones a favor de los industriales. Numerosos aldeanos informaron que los jefes de muchas aldeas y algunos de sus pobladores habían recibido sobornos para hablar a favor de los industriales. En consecuencia, lo que se suponía que sería un proceso democrático en el cual los aldeanos expresarían libremente sus opiniones fue subvertido por los representantes de la industria, que recurrieron a actos de incivildad apoyados por la policía, que replicó dichos actos con el objetivo de intimidar a los aldeanos. Como resultado del temor, el segundo y el tercer día éstos no se presentaron a la audiencia pública.

A partir del referido relato de los eventos a lo largo de los años resulta bastante evidente que toda vez que se fortalecieron las demandas estructurales como resultado de la acción colectiva organizada, el mercado, la sociedad civil y el Estado han exhibido tendencias de incivildad destinadas a suprimir la actividad política popular. Como consecuencia de esa incivildad de las instituciones, el Estado pierde su legitimidad y es percibido como injustamente alineado con los intereses dominantes. Existe una percepción generalizada de que el aparato del Estado –representado en este caso, por ejemplo, por el Comité de Control de la Contaminación (CCC) y por la policía que no aplican la ley o que incluso recurren ellos mismos a métodos extrajudiciales– no solamente puede ser manipulado sino que además es arbitrario e inconsistente en su conducta. El Estado pierde entonces

su imagen de árbitro imparcial. A esto se agrega el hecho de que, al no iniciar acciones contra los elementos mafiosos a causa de sus vínculos con los principales partidos políticos y al no reaccionar contra los actos de violencia perpetrados por los industriales, el Estado deja un muy escaso margen para la protesta política organizada.

Existe aún otra tendencia que la actividad política puede adoptar como consecuencia de la creciente incivilidad. Encontramos que, como resultado de la incivilidad creciente, lo que comienza como una actividad política en pos de demandas de largo plazo (en este caso, el cierre de las industrias), termina adoptando la forma de la política de intereses. Como ya se ha sugerido, el problema de la política basada en intereses es que los intereses colectivos resultan a menudo sacrificados en aras de intereses relativos a la inmediatez y la supervivencia. La “sociedad política” se abstiene de plantear cuestiones estructurales, e incluso cuestiones de interés colectivo, y recae en la búsqueda de oportunidades que satisfagan las necesidades inmediatas, en particular aquellas relativas a los problemas de la supervivencia. Esta política alternativa, basada en intereses, comienza a aparecer como mucho más factible. De ahí el aumento de las “estrategias” y “negociaciones” de intereses. Encontramos, sin embargo, que toda vez que la gente ha recurrido a la política de intereses, la actividad política se ha tornado insostenible y, en el largo plazo, sus resultados han sido contraproducentes para la comunidad, volviéndola más débil y más vulnerable. El carácter insostenible de la actividad política basada en las “negociaciones” de intereses de la “sociedad política” se debe a su impacto sobre la solidaridad colectiva.

Hallamos, en realidad, que puesto que la sociedad está estratificada sobre la base de numerosas estructuras, los intereses también lo están. En una actividad política iniciada por una sociedad así estratificada, la comunalidad de interés reviste una significación solamente simbólica, proveyendo la base para una unidad artificial del colectivo. Mientras que la actividad política colectiva impone presión sobre el sistema y crea condiciones bajo las cuales éste se ve obligado a incluir las demandas del colectivo, los actos orientados por intereses de individuos o de pequeños grupos (dentro del colectivo) en el marco de la “sociedad política” sacan ventaja de esa presión para impulsar sus propias demandas. Como consecuencia de los beneficios devengados a la “sociedad política” basada en intereses, los grupos beneficiarios toman distancia de la actividad política colectiva, y en ese acto la debilitan. En los párrafos que siguen mostramos de qué modo esas tendencias de la política basada en intereses se manifestaron en Kazipally.

En 1989, poco después de que el planteo de demandas estructurales de las *dharnas* suscitara golpizas y arrestos, dichas demandas adoptaron la forma de la política de intereses. En vez de exigir el cierre de las unida-

des contaminantes, los aldeanos demandaron que les fueran otorgados medios de sustento y oportunidades para obtener ingresos. El proceso manufacturero en estas industrias, predominantemente productoras de drogas y compuestos químicos, produjo cenizas secas como residuo. Esta ceniza está siendo utilizada para la fabricación de ladrillos en hornos de ladrillos ubicados en las cercanías del poblado. Hay otras tareas que son ofrecidas a los pobladores: ocuparse de los tanques de agua corriente, emplearse en la construcción o en actividades de transporte, etc. Los aldeanos no reciben, sin embargo, ofertas de empleo como trabajadores industriales. Algunos jóvenes han sido empleados por industrias que no son directamente responsables por la contaminación de la región de Kazi. Estas industrias están ubicadas en otros sitios, a distancias mucho mayores de la aldea. Y aún así las oportunidades obtenidas por los jóvenes son sólo en calidad de trabajadores contratados por el día.

En 1995, cuando los aldeanos saquearon las empresas, las industrias no clausuraron sus plantas; sin embargo, la Asociación Industrial Modelo, en representación de las industrias, y la aldea –representada por sus líderes, incluidos el Sarpanch y el presidente del Zilla Parishad (Consejo de Distrito)– firmaron entonces un Memorándum de Entendimiento. Una suma de 400.000 rupias fue pagada a la aldea. Con ese dinero se construyó un centro comunitario, se tendieron calles y se emprendieron otras actividades similares consideradas actividades de desarrollo. A cambio, los pobladores debían retirar todas las demandas que habían presentado contra las industrias contaminantes. Algunos grupos disidentes, sin embargo, persistieron en la presentación de sus casos ante la Corte. En 1998 una directiva del Tribunal Supremo de Andhra Pradesh ordenó el cierre de todas las industrias contaminantes. Las industrias, sin embargo, acudieron a la Corte Suprema y obtuvieron de ella una orden de aplazamiento del cierre. En 1999 el Ministro en Jefe de Andhra Pradesh hizo una declaración sobre el tema de la contaminación en la cual afirmó que “estas industrias estaban ganando moneda extranjera para el país y que las autoridades de control de la población deberían avanzar lentamente en la cuestión de la contaminación. Si las industrias son acosadas, ello podría afectar el crecimiento”.

En el año 2001, a partir del caso presentado ante ella, la Corte Suprema emitió una orden exigiendo el cierre de dieciocho industrias hasta que se ajustaran a los estándares prescriptos de calidad del agua y disposición de los desechos. Sin embargo, después de un breve período de cierre el CCC reabrió las industrias. En ese mismo año la Corte Suprema emitió un fallo en el que estableció que los industriales debían pagar compensaciones a los agricultores cuyas tierras habían sido dañadas por efecto de la contaminación. La compensación pagada fue, sin embargo, de la irrisoria suma de 1700 rupias por acre y por

año. Este monto no era siquiera equivalente a los costos insumidos por la compra de semillas. Además, los que carecían de tierras no recibieron compensación alguna. Como parte del mismo fallo, se dictaminó que el agua potable extraída del río Manjira que abastecía a la ciudad de Hyderabad debía también ser proporcionada al poblado.

En el 2002 el pueblo logró que algunas de sus demandas fueran aprobadas sobre el papel. El inspector del distrito ordenó que se realizaran reparaciones en el tanque de Kazipally. El inspector había ordenado que las industrias aportaran la suma de 900.000 rupias con ese propósito. Los pobladores, sin embargo, se decepcionaron luego de un breve período de expectativa que se generó cuando los *Grasshoppers*³ fueron enviados a la aldea para iniciar los trabajos. El día en que éstos debían comenzar fue de festejos: se realizó una *puja* (ceremonia de ofrendas) en el sitio de los trabajos, y un coco fue ofrecido a los dioses. Luego de que unos pocos de montones de barro fueron extraídos del tanque, sin embargo, la maquinaria ya nunca regresó. Al ser contactado para interrogarlo acerca de los trabajos, el inspector de Medak dijo a los representantes del pueblo que los industriales no estaban dispuestos a aportar la suma de dinero requerida y que el gobierno no estaba negociando con ellos.

En el 2003 la cuestión de la contaminación obtuvo una considerable y favorable atención mediática. La prensa y los medios electrónicos regionales dieron amplia cobertura al tema. K. G. Kannabiran, Presidente Nacional de la Unión del Pueblo por las Libertades Civiles (PUCL, por sus siglas en inglés) realizó numerosas presentaciones ante el CCC en nombre del pueblo de Kazipally. A raíz de la nueva atención que recibió el problema, fue establecida una comisión investigadora presidida por el juez Gomal Rao, ex presidente del Tribunal Supremo de Andhra Pradesh. La comisión quedó bastante sorprendida por la condición en que se hallaba el tanque cuando realizó una visita al pueblo. Luego de esta visita, se pidió a los habitantes que aportaran pruebas de las violaciones. Los aldeanos comenzaron a actuar como equipos de vigilancia, y al hacerlo sorprendieron a varias industrias arrojando efluentes en un arroyo que llevaba agua al tanque y quemando desechos sólidos tóxicos fuera de las instalaciones de la compañía. Como resultado de estas instancias de violación de las leyes, las empresas debieron realizar un depósito por 2.5 millones de rupias en concepto de garantía, que perderían en caso de eventuales violaciones futuras.

En el año 2004 Greenpeace publicó un informe sanitario en el que comparaba los patrones de enfermedad en los pueblos afectados por la contaminación con los de otros pueblos no afectados. El informe reveló

3 Equipos de ingeniería pesada utilizados para cavar y extraer barro.

varias tendencias perturbadoras. Sugirió que las aldeas afectadas mostraban tasas de incidencia de numerosos tipos de afecciones, incluidas las enfermedades congénitas y el cáncer, muy superiores a las de las aldeas no afectadas. Algunas enfermedades tenían en aquéllas una presencia entre 200 y 300 veces superior. A partir de estos descubrimientos se percibió la necesidad de contar con al menos un centro de atención primaria de la salud con autoridad de derivación. Los pacientes podrían entonces recibir tratamiento gratuito en hospitales públicos de la ciudad. Hasta ahora, sin embargo, nada de ello se ha materializado.

Concluimos, en suma, que los logros de las víctimas de Kazipally han sido sumamente limitados. Pese a que se han planteado numerosas demandas que reflejaban intereses colectivos –aunque no estructurales en el sentido definido–, tales como oportunidades de empleo en las industrias, reparaciones a los tanques, el cumplimiento de los estándares de calidad, la imposición de la prohibición de arrojar desechos no tratados en el tanque del pueblo y el establecimiento de un centro de salud con autoridad de derivación, ninguna de esas demandas se materializó. Las razones del fracaso de las demandas colectivas residen claramente en el carácter “estratégico” y contextualmente definido de la “política de lo posible” propia de la “sociedad política”.

LA “SOCIEDAD POLÍTICA” Y LA COMUNIDAD EN DESCOMPOSICIÓN

En 1989, cuando fue obtenida la oportunidad de vender ceniza seca y de tomar empleos en el transporte y la construcción, un gran número de pobladores estuvo dispuesto a realizar esos trabajos. Estas oportunidades se presentaban en cantidades muy inferiores al número de aldeanos dispuestos a tomarlas. Ello condujo, por consiguiente, a disputas internas acerca de quién habría de aprovecharlas. Estratégicamente, los industriales confirieron al Sarpanch la autoridad para decidir quien tomaría esos empleos. La decisión fue “estratégica” en el sentido de que los Sarpanch podrían ser fácilmente atraídos al bando de las industrias mediante el otorgamiento de sobornos de tanto en tanto. Dadas las frecuentes defecciones al bando industrialista por parte de los Sarpanch, este sistema de asignación de oportunidades condujo a una situación en la cual las oportunidades fueron otorgadas a los aldeanos que aseguraron que no darían la señal de alarma sobre el problema de la contaminación. En consecuencia, una porción de quienes luchaban contra la contaminación se retiró de la lucha. Esto fue resultado de su dependencia de la industria para su sustento, hasta tal punto que el propio presidente del Comité Kalushya Vyatireka Raitu (KVRC, *Comité de Agricultores contra la Contaminación*), la principal organización montada por los agricultores para luchar contra la contaminación, comenzó a trabajar

en un contrato de construcción en una de las unidades industriales más contaminantes. Los beneficiarios fueron los agricultores relativamente más acomodados, poseedores de algunos activos tales como vehículos, tractores, etc., aptos para transportar materiales de construcción, o capaces de movilizar fuerza de trabajo.

Dado que los Sarpanch se hallaban en connivencia con los industriales, hubo muchos otros métodos a los que echaron mano para impedir que los pobladores participaran en la protesta contra la contaminación. Algunos de esos medios de control merecen ser discutidos aquí. Con el trasfondo de su desplazamiento de las ocupaciones tradicionales, y de la agricultura en particular, los agricultores que se involucraron activamente en la protesta contra la contaminación obviamente no pudieron obtener oportunidades en la industria. Uno de los activistas con cargo en el KVRC obtenía su sustento de la extracción no autorizada de piedra. Podía hacerlo porque era propietario de un tractor que era utilizado para transportar los bloques de granito y concreto hasta las empresas de construcción. El agricultor había obtenido un crédito de 100.000 rupias para contratar obreros que hicieran el trabajo por él. Luego de que la tarea fue completada, el agricultor pagó a los obreros sus salarios y, cuando estaba a punto de transportar el material a la empresa de construcción, el Sarpanch lo citó y lo amenazó con arrestarlo por haber extraído la piedra ilegalmente. El agricultor no solamente se sintió amenazado con el arresto, sino que además temió no estar en condiciones de devolver el crédito que había solicitado. El Sarpanch, pues, lo convenció de que se retirara de la protesta contra las industrias. Bajo presión, el agricultor se mantuvo alejado del KVRs.

En 1995, nuevamente, cuando fue firmado el Memorándum de Entendimiento entre las autoridades de los pueblos y la Asociación Industrial Modelo, un número importante de agricultores no se acercó a los tribunales con quejas acerca de la contaminación. Ello se debió a que, del monto de 400.000 rupias devengado, ellos habían recibido algún dinero en concepto de compensación. La decisión acerca de la compensación fue arbitraria, puesto que no todos los agricultores la recibieron. Ella estuvo, nuevamente, sesgada en favor de los que aseguraron que se mantendrían alejados de toda actividad política contra la contaminación. El presidente de los Distritos Territoriales de Zilla Parishad (ZPTC, *Zilla Parishad Territorial Constituencies*), uno de los signatarios del Memorándum, era él mismo propietario de alrededor de 40 acres de tierra en el pueblo. Era una víctima que había sufrido las mayores pérdidas en términos del número de acres de tierra afectados. Esta persona había estado activa en la movilización de los agricultores desde 1989 en adelante. Luego de este episodio, aunque de tanto en tanto se hizo presente en actividades de protesta de los

pobladores contra la contaminación, se mantuvo apartado de toda actividad adicional de movilización relacionada con la protesta contra la contaminación.

Otra instancia en que se manifestó la subversión de la acción contra la contaminación industrial fue la forma en que las industrias trataron con los agricultores cuyo ganado había muerto luego de beber agua contaminada. Previamente los agricultores llevaban su ganado al hospital veterinario público y, luego de hacerlo examinar por los médicos, obtenían un certificado que informaba que la muerte del ganado podía deberse al consumo de agua química tóxica. Este certificado era necesario para que pudiera llevarse a cabo sobre el ganado muerto cualquier investigación forense adicional en el hospital veterinario público de la ciudad, luego de lo cual podía asentarse una denuncia en la policía, sobre la base de la cual podía despacharse una orden legal que sería la base de la demanda de compensación por el ganado. El cúmulo de quejas y casos de esta clase constituirían una evidencia irrefutable contra las industrias. Temiendo que ello sucediera, los industriales disuadieron a los pobladores de acudir a los hospitales veterinarios públicos o de registrar sus reclamos ante la policía. Afirmaron, en cambio, que aquellos que hubieran perdido su ganado como consecuencia del consumo de agua tóxica podían dirigirse a las industrias por intermedio de su Sarpanch. Así, a lo largo de los años numerosos aldeanos recibieron compensación toda vez que perdieron ganado. Sin embargo, no existe evidencia alguna que sugiera que la pérdida del ganado se haya debido a la contaminación.

En las elecciones de Panchayat de 2004 se presentó un nuevo candidato para el puesto de Sarpanch con un programa de un solo punto que, según afirmaba, aseguraría la resolución del problema de la contaminación en el pueblo de Kazipally. Este candidato fue elegido por el pueblo. Poco después de resultar electo, el nuevo Sarpanch envió citaciones a cincuenta industrias acusadas de contaminar. Los industriales fueron convocados a negociar con el poblado. Treinta de ellos asistieron a la reunión de negociación, de la que participaron en calidad de mediadores los señores K. G. Kannabiran, de la Unión del Pueblo por las Libertades Civiles, y G. Haragopal, del Comité por las Libertades Civiles de Andhra Pradesh (APCLC, por sus siglas en inglés). En esta negociación, el Sarpanch declaró categóricamente que el pueblo no aceptaría ninguna compensación a menos que las empresas dejaran de contaminar por completo el tanque del pueblo y realizaran las necesarias reparaciones del tanque. Una segunda ronda de conversaciones fue programada para unas semanas más tarde. Entretanto, el Sarpanch cerró un acuerdo privado y aceptó un paquete de compensación para el pueblo, distribuyendo algún dinero entre sus

pobladores. Ni las reparaciones del tanque ni las reducciones de la contaminación tuvieron lugar. Y para colmo de males, en la audiencia pública que tuvo lugar en el 2005 este Sarpanch declaró que el desarrollo del pueblo dependía de la industrialización y sostuvo vehementemente que las industrias no debían ser cerradas.

A partir de las diferentes situaciones arriba mencionadas concluimos, en suma, que aquello que es descrito como “política estratégica” o “negociaciones” dentro de la “sociedad política” puede asegurar la movilidad social en un sentido muy fragmentado. En los casos citados, por ejemplo, los pobladores de tanto en tanto recibieron dinero a causa de la protesta. Es posible afirmar que los activistas agrícolas del KVRS que redujeron “estratégicamente” la intensidad de la lucha o que se mantuvieron apartados de toda actividad adicional ya fuera porque recibieron de manos de las industrias alguna oportunidad o porque dependían de la administración local para poder seguir realizando las actividades ilegales de que dependían sus ingresos alcanzaron algún grado de integración dentro del sistema. Sin embargo, tampoco puede negarse que las “estrategias” emprendidas por pequeños grupos y las negociaciones individuales de incentivos desplazaron efectivamente al interés general de la comunidad y a la acción colectiva dentro de la “sociedad política”, tanto en términos de la renuncia a demandas de la comunidad tales como la obtención de la reparación del tanque, la prohibición de la descarga de residuos tóxicos en el tanque del pueblo y el establecimiento de un centro de salud, como en términos del costo que debe pagar la comunidad por el hecho de haber renunciado a su interés comunitario, que se manifiesta en las afecciones a la salud que sigue sufriendo la comunidad como consecuencia de la contaminación. Además de estos costos directos que pesan sobre la comunidad, la “política estratégica” tiene un impacto de largo plazo sobre la propia vida de la comunidad, es decir, sobre la confianza, el tejido social, las relaciones sociales y la solidaridad entre sus integrantes. Lejos de la comunidad “que lucha colectivamente como si fuera una sola familia”, todos estos factores conducen a la descomposición de la comunidad, dificultando enormemente la actividad política sostenida. En los pocos párrafos que siguen enumeramos estas dimensiones del problema.

La usual dependencia de los aldeanos respecto de instituciones tales como el Panchayat se debe a la desigualdad existente entre los agentes de la contaminación y sus víctimas. La falta de acceso a la información es también un factor que conduce a la dependencia de la gente de instituciones formales tales como el Panchayat. Sin embargo, cuando los propios representantes del pueblo defecionan y se suman al bando de los contaminadores, aquellos que representan al pueblo a través del activismo político contra la contaminación quedan

colocados en una situación de mayor vulnerabilidad. Estos activistas de la aldea con frecuencia dependen de activistas sociales externos o de otras redes para su protección contra el Estado y los elementos mafiosos inciviles. Pero si estas fuerzas sociales resultan ser débiles, entonces los activistas políticos procedentes del común de la gente del pueblo no logran sostener la resistencia. En esas circunstancias, el activismo político es dejado de lado en favor de “políticas estratégicas” que persiguen ya sea beneficios individuales que se expresan en la creciente cultura de la compensación, o simplemente la satisfacción de las necesidades inmediatas de la comunidad sin encarar el problema de la contaminación como tal.

En palabras del agricultor Narasanna:

El Panchayat es corrupto y algunos líderes son incluso criminalizados. No hay nadie ante quien estos líderes deban rendir cuentas. Una vez el CCC cerró todas las industrias contaminantes. El Sarpanch fue y otorgó certificados de no objeción y las hizo reabrir. Y nosotros los agricultores dependemos de esas industrias para nuestro sustento: algunas proveen agua, algunas comercian con ceniza, otras proveen materiales de construcción, y así sucesivamente. Si participamos en las protestas perdemos nuestros medios de vida [...]

El hecho de que los agricultores se hayan asociado con diferentes actividades vinculadas a las industrias es el resultado de las severas presiones que sufren. Los entrevistados mencionan repetidamente los costos relativos al tratamiento de las afecciones a la salud, el matrimonio de las hijas y la educación de los niños. Todas estas demandas que pesan sobre los proveedores del ingreso del hogar los compelen a transigir, a retirarse de la lucha contra la contaminación y a ingresar en negociaciones individuales.

Amina, la madre de un agricultor, afirma: “La gente se une si ve la posibilidad de que de la protesta emerja una solución. Pero si no ve esa posibilidad, prefiere negociar individualmente con los industriales y obtener todo lo que pueda”.

Tal como lo señala Padmaja, un coordinador de la Agencia para el Desarrollo de las Mujeres y los Niños en Áreas Rurales (DWCRA), una vez que el logro de oportunidades se vuelve una búsqueda individual “se profundiza la cultura competitiva y crecen las comparaciones entre familias en términos de status. Y la conducta individualista conduce al debilitamiento de la comunidad”. Como consecuencia de la conducta individualista y la cultura competitiva, sostiene Venkataramani, otro líder de la DWCRA, que “últimamente hay mucha fricción entre familias en el pueblo. Las familias no están compartiendo los problemas, los recursos o el trabajo. La ayuda recíproca entre miembros de

las familias extendidas se ha debilitado”.

En el curso de nuestro trabajo de campo nos encontramos con numerosos casos de personas mayores que se quejaban del abandono y la falta de cuidados de sus familias. Esta es una de las manifestaciones más perceptibles de la descomposición de la comunidad.

Una cultura agraria en un poblado se constituye de variadas formas culturales, en particular en lo que se refiere a la celebración de los numerosos festivales. En su distribución a lo largo del tiempo, su simbolismo y su forma, los festivales se vinculan con las estaciones y la economía agrícola. La destrucción de la agricultura a causa de la contaminación ha reducido actualmente al pueblo a un colectivo meramente en su forma, sin modos de expresión de esta colectividad en la vida cotidiana. En la actualidad, con excepción del Moharram –durante el cual tanto la comunidad hindú como la musulmana participan de las festividades ningún festival– es ya celebrado con fervor tradicional.

El agricultor Narasimha afirma que “antes, todos los pobladores dependían de la agricultura y había mucha vida comunitaria. Además, los ingresos de la gente se derivaban del trabajo duro. No había dinero fácil”.

Actualmente, las ocupaciones tradicionales con base en el pueblo han sido reemplazadas por oportunidades externas a él. La mayor parte de los jóvenes trabaja contratados por paga diaria en industrias que no son directamente responsables por la contaminación de sus aldeas de origen. Ello se debe a que los jóvenes podrían objetar la emisión de desechos por parte de las industrias en que trabajan si éstas contaminaran los tanques de su propio pueblo. Mientras los jóvenes se dirigen a industrias localizadas fuera de sus poblados, los líderes del ala joven afirman que este nuevo ambiente de trabajo ha puesto a los jóvenes en contacto con una nueva sociedad migrante. Las comunidades inmigrantes que trabajan en estas industrias tienen una muy baja calidad de vida. Esta nueva cultura ha creado un nuevo segmento de la juventud que no se preocupa seriamente por las cuestiones relativas a los poblados. Los jóvenes están poco dispuestos a identificarse con la agricultura y la comunidad rural. Ello ha debilitado aún más a la comunidad.

Mientras los agricultores sostienen que los jóvenes tienen un muy escaso compromiso con el poblado, los jóvenes señalan que los agricultores se retiran de la lucha tan pronto como reciben una compensación. Y las estructuras patriarcales limitan la capacidad de las mujeres para tomar decisiones independientes sobre si actuar contra el problema de la contaminación. Por consiguiente, las mujeres son vistas como una categoría débil que tiene un rol prácticamente residual cuando los hombres se hallan limitados por sus obligaciones. Las mujeres son percibidas como personas cuyos intereses se limitan a la familia,

sin un verdadero rol social externo a esta. Así las cosas, se supone que la prioridad de las mujeres es la obtención de una compensación o de un medio de vida para los integrantes masculinos, más que el compromiso con la erradicación de la contaminación. Así, lo que tenemos es una comunidad en la cual a lo largo de los años se ha producido una pérdida completa de la confianza entre los diferentes grupos sociales. Es a causa de ello que las asociaciones de jóvenes, las organizaciones de agricultores y las mujeres de la DWACRA no logran trabajar en conjunto.

La “sociedad política” indudablemente nos permite captar el carácter distintivo de la dinámica de los sectores subalternos en oposición a y en contraste con las normas de la sociedad civil. Es en ese sentido que lleva nuestra comprensión del proceso de democratización más allá de los terrenos clásicos, establecidos y seguros del Estado y la sociedad civil. Sin embargo, al trazar la dinámica interna de este terreno se lo achata y se elude la cuestión más importante de la sustentabilidad de tales sitios alternativos tan perfectamente consistentes. En primer lugar, los ocupantes ilegales de Calcuta tendrían éxito en forzar el reconocimiento estatal de sus “demandas” como una “fuerza moral” en la medida en que no entraran en conflicto con intereses poderosos tanto en el Estado como en la sociedad civil al plantear cuestiones estructurales como las que fueron planteadas en Kazipally; es, por consiguiente, (in)explicable la razón por la cual la “política estratégica” no puede evitar la demolición de numerosos asentamientos precarios en todo el país y las personas desplazadas no son rehabilitadas por un Estado que actúa en forma “contextual” e “instrumental”⁴. El reconocimiento de las negociaciones “estratégicas” basadas en intereses, que eventualmente desplazarán a la acción colectiva organizada, es por consiguiente parte de la lógica sistémica. La idea de que estas variadas formas de protesta pueden coexistir dentro de una “sociedad política” indiferenciada es insostenible. En segundo lugar, la “sociedad política” de los ocupantes ilegales sostenida en torno de la “política estratégica” y productora de una “comunidad” o una “única familia” es una anomalía. Por el contrario, las negociaciones “estratégicas” o basadas en intereses a lo largo de un cierto período de tiempo sólo vuelven a la comunidad más vulnerable, empujando así a los

4 En su trabajo más reciente, Partha Chatterjee nos informa acerca de la orden judicial para desalojar a los ocupantes ilegales que había estudiado y acerca de la creciente probabilidad de que fueran removidos por la fuerza. “Es, pues, bien posible que el equilibrio de la política estratégica se modifique lo suficiente para que estos ocupantes ilegales sean desalojados mañana... Tal es la tenue lógica de la política estratégica en la sociedad política” (Chatterjee 2003:60). Sin embargo, aún no reconoce que esa “política estratégica” crece en el sitio de la actividad política organizada y no puede de hecho coexistir con ella en una “sociedad política”.

individuos y grupos sociales a buscar su propio beneficio. Tal como lo atestiguan la creciente cultura de la compensación y la declinante confianza entre los jóvenes, los viejos, los agricultores y las mujeres en Kazipally, esas “negociaciones” están en abierto conflicto con los intereses colectivos y se articulan en torno de las estratificaciones sociales disponibles. En ausencia de los recursos necesarios para sostener la acción colectiva en aras de la rehabilitación, el empleo y la dignificación de la vida de los ocupantes ilegales de Calcuta, o del cierre de las industrias y la recuperación de la agricultura en el caso de la gente de Kazipally, los “festivales comunitarios” sólo permanecen como meros gestos simbólicos de la vida colectiva. Finalmente, la “sociedad política” en tanto que “política estratégica” sólo refleja una política que genera inseguridad perpetua para los vulnerables al incorporar nociones insostenibles de movilidad que en verdad sólo pueden ser utilizadas por los grupos sociales que están mejor equipados para obtener el patronazgo de las élites sociales, los funcionarios gubernamentales y los líderes políticos. Lejos de “hacer una gran variedad de conexiones con otros grupos en situaciones similares”, meramente aumenta la posibilidad de excluir a los más vulnerables, tales como las gentes sin tierra, capital ni recursos mínimos en Kazipally. En relación con estos sectores, lejos de responder mediante “políticas de bienestar”, el Estado se torna cada vez más incivil para lidiar y colaborar con los procesos de desarrollo incivil en el mercado. Esto resulta más que evidente si se consideran las acusaciones de los aldeanos políticamente activos en casos falsos y las amenazas y los ataques físicos perpetrados por la mafia durante las audiencias públicas, además de la descaradamente sesgada brutalidad policial en Kazipally.

BIBLIOGRAFÍAS

- Baumol, W. J. y W. E. Oates 1988 *The Theory of Environmental Policy* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Beteille, Andre 1995 “Universities as Institutions” en *Economic and Political Weekly* (New Jersey: Princeton).
- Beteille, Andre 1995 “Civil society and its Institutions” en E.M. Elliot (ed.) *Civil Society and Democracy: A Reader* (Oxford: Oxford University Press)
- Chandoke, Neera 2001 “The ‘Civil’ and the ‘Political’ in Civil Society” en *Democratization*, N°8.
- Chandoke, Neera 2003 *The Concepts of Civil Society* (Oxford: Oxford University Press).
- Chatterjee, Partha 1997 “Beyond the Nation? Or Within?” en *Economic and Political Weekly* (New Jersey: Princeton) Enero.
- Chatterjee, Partha 1998 “Community in the East” en *Economic and*

- Political Weekly* (New Jersey: Princeton) Febrero.
- Chatterjee, Partha 2004 *Politics of the Governed* (Nueva Delhi: Permanent Black).
- Chen, Kuan Hsing 2003 "Civil Society and Min-Jian: On Political Society and Popular Democracy" en *Cultural Studies*, N°17.
- Edwards, Michael 2000 "Enthusiasts, Tacticians and Sceptics: The World Bank, Civil Society and Social Capital" en <http://www.worldbank.org>.
- Elliot, C.M (ed.) 2004 *Civil Society and Democracy* (Oxford: Oxford University Press).
- Foley, Michael y Edwards, Bob 1996 "The Paradox of Civil Society" en *Journal of Democracy* (Washington DC) N°7, Julio.
- Greenpeace India 2004 *State of Community Health at Medak District* (Bangalore: Greenpeace).
- Gupta, Dipankar 1999 "Civil Society or the State" en Ramchandra Guha and Jonathan Parry (ed.) *Institutions and Inequalities* (Nueva Delhi: Oxford University Press).
- Kothari, Rajini 1988 *State Against Democracy* (Nueva Delhi: Ajanta Publishers).
- Kothari, Rajini 1989 "NGOs, State and World Capitalism" en *New Asian Visions*, N°6.
- Mahajan, Gurpreet 1999 "Civil Society and its Avatars" en *Economic and Political Weekly* (New Jersey: Princeton) 15 de Mayo.
- Menon, Nivedita 2004 *Recovering Subversion: Feminist Politics Beyond the Law* (Nueva Delhi: Permanent Black).
- Vijay, G. 1999 "Social Security of Labour in New Industrial Towns" en *Economic and Political Weekly* (Nueva Jersey: Princeton) 25 de Septiembre.
- Vijay, G. 2003 "Other Side of New Industrialisation" en *Economic and Political Weekly* (Nueva Jersey: Princeton) 29 de noviembre.